

APENDICE

A. INSERCIONES

I

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO SALVATORI

I. Opinión del señor diputado acerca del dictamen sobre presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2001

Quiero expresar observaciones al Orden del Día N° 1.450, correspondiente al proyecto de ley de presupuesto general de la administración pública nacional para el ejercicio fiscal del año 2001 (expediente 9-JGM-2000), que complementan las que fueron presentadas con fecha 20 de noviembre del corriente año.

En este caso me referiré específicamente al presupuesto de gastos; entiendo que la economía se encuentra en un estado delicado, y coincido en que

el déficit no puede ser incrementado ilimitadamente. Pero antes de reducir el gasto debemos observar la calidad del mismo.

Hemos notado que algunos organismos descentralizados que forman parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente del Ministerio de Economía, no cuentan con los recursos necesarios para prestar los servicios imprescindibles para el desarrollo de las actividades que realizan y que tienen relación directa con el desarrollo económico del país.

Entre los objetivos del Ministerio de Economía se encuentran el de promover un mayor nivel tecnológico en la actividad agropecuaria para aumentar su productividad y calidad, y el de desarrollar acciones que permitan disminuir el impacto de los riesgos climáticos.

Asimismo, según dice la descripción de su programa, "la secretaria se encuentra conduciendo una compleja programación a efectos de atender el amplio espectro de actividades que le son propias, actuando como coordinadora del esfuerzo de los organismos descentralizados dependientes, en los que se desarrollan aspectos específicos complementarios, relacionados con el control de las enfermedades endémicas de animales y vegetales, la investigación y desarrollo de tecnología agropecuaria...". Estos objetivos se convertirán en meros enunciados si los organismos no cuentan con los recursos para llevar a cabo las políticas en esa materia.

En particular me refiero al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, importante organismo descentralizado que cumple una función tan esencial como lo es la de prestar servicios de apoyo a los productores. ¿Cómo podremos enfrentar la demanda de productos frutihortícolas de los países desarrollados, que requieren calidades especiales respecto al producto y realizan un control sobre los insecticidas utilizados para combatir las plagas que afectan a la producción?

La reducción del gasto en estos organismos produce un efecto contrario al deseado. Es allí donde debemos gastar, porque son instrumentos para conquistar mercados y movilizar economías regionales postergadas.

Otro ejemplo es el SENASA. Hace muy poco tiempo, por falta de controles, hemos tenido problemas por la transmisión desde países limítrofes de la aftosa, enfermedad que afecta al ganado vacuno.

A raíz de esa deficiencia estuvimos al borde de perder mercados y el esfuerzo que los productores y el Estado nacional han hecho durante muchos años para erradicar la aftosa.

Otro tema sobre el cual quiero manifestar mis observaciones es el de la falta de recursos para los servicios que prestan los bomberos voluntarios, recursos que tienen su basamento jurídico en el subsidio que establece el decreto ley 6.711/63, ratificado por la ley 16.478, por un monto del 15 por ciento del producido del impuesto interno a las primas de seguros contra incendio en el ejercicio inmediatamente anterior. Sin embargo, en virtud de que el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 1.453/98, observó el artículo 11 de la ley 25.054 —que establecía: "Acuérdase a las asociaciones reconocidas en el artículo 3° integrantes del sistema bomberil de voluntarios de la República Argentina, un subsidio anual equivalente al 22% del producido del impuesto interno a las primas de la totalidad de los seguros"—, y dado que un nuevo proyecto de ley (expediente 2.176-D.-2000) presentado con el mismo fin no fue aprobado, estas organizaciones no cuentan con recursos suficientes para cumplir con un servicio esencial, que se organiza por falta de prestaciones de parte del Estado nacional, en esta materia.

Por todo lo expuesto solicito se incorpore en el presupuesto para el próximo ejercicio una suma fija

de 1.000.000 pesos destinada a atender los requerimientos de las organizaciones de bomberos voluntarios de todo el país.

II. Opinión del señor diputado acerca del artículo 53 del dictamen sobre presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2001

Quiero expresar mi disidencia con relación al artículo 58, capítulo XI, "De la reorganización administrativa", correspondiente al proyecto de ley de presupuesto general de la administración pública nacional para el ejercicio fiscal del año 2001, expediente 9-JGM-2000:

El capítulo XI conformado por el artículo 58 del proyecto de ley incorpora una serie de medidas y pautas para reorganizar el Estado nacional en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Las medidas estarán a cargo de la Comisión para la Modernización del Estado creada por el decreto 17 del 6 de enero de 2000. Pueden ser resumidas de acuerdo con los sectores que se encuentran involucrados, como:

Relativas al personal

1. Eliminación de los convenios y estatutos de aquellas cláusulas que generan rigideces administrativas, ineficiencias y costos injustificados.

2. Supresión de aumentos salariales generados por el mero transcurso del tiempo.

3. Supresión de aumentos automáticos de salarios por egresos de escuelas e institutos de especialización del personal de la administración nacional.

Respecto de estas medidas señalamos que es preciso establecer normas tendientes a incentivar la labor de los empleados públicos, en especial a través de la capacitación y la especialización. Todos los sectores de la administración pública requieren de la formación de cuadros profesionales para hacer más eficientes los servicios; en este sentido observamos que la reforma administrativa llevada a cabo en los últimos diez años ha diseñado estructuras administrativas, como los entes encargados de fiscalizar los servicios públicos, que cuentan con personal capacitado y remunerado de acuerdo con su capacidad.

Relativas al rediseño de la estructura de la administración nacional

1. Promover el desarrollo de procesos de ingeniería administrativa tendientes a disminuir el gasto en cada área.

2. Suspensión de funciones y organismos innecesarios.

3. Concentración de funciones en una misma unidad administrativa, de manera de reducir el número de direcciones y equivalentes.

4. Integración a la administración central de aquellos organismos descentralizados en los que no está justificada su autarquía y personería jurídica y fusión de los mismos.

5. Negociación de transferencia a gobiernos locales de funciones para las que éstos sean más aptos.

6. Tercerización de servicios.

En este grupo de medidas debemos observar las que tienen que ver con la transferencia de servicios a los gobiernos provinciales, ya que ello implica además la transferencia de los recursos necesarios para poder dar cumplimiento a su prestación. No olvidemos que los gobernadores han firmado un acuerdo por el cual se establecieron las transferencias a recibir por las provincias en los últimos cinco años.

Con respecto a la tercerización de servicios, observamos que en este tipo de procedimientos no se compatibilizan los objetivos que persiguen las empresas prestadoras de estos servicios con los del Estado Nacional, ya que por lo general lo hacen a más alto costo y utilizando a trabajadores en condiciones de precariedad.

El manejo de la cosa pública requiere de eficiencia y esto se consigue a través de la capacitación y de un adecuado incentivo al personal, de acuerdo con el cumplimiento, de las responsabilidades asignadas.

Por último, se incorpora un mecanismo de premios y castigos estructurado sobre la base de los resultados alcanzados con las reformas administrativas implementadas. El premio consiste en disponer del 70 por ciento del ahorro presupuestario alcanzado, mientras que a los organismos que hayan dado principio de ejecución a la reforma prevista antes del 31 de julio de 2001, se les reducirá un 10% de sus gastos de funcionamiento.

Esta norma debe ser reformada dado que en el Estado nacional existen funciones de diferentes características, cuya eficiencia no se puede valorar por la magnitud del gasto.

Creo que se debe realizar una reforma del Estado prestando especial atención a los recursos humanos.

Por otra parte, con fecha 19 de octubre del corriente año hemos sancionado la Ley de Emergencia Económica 25.344, en la que se ha incluido el capítulo III, cuyos artículos 4º y 5º tratan de la "Relación de empleo Público", por lo que entiendo que el Poder Ejecutivo cuenta con las normas necesarias para modernizar el Estado nacional.

Por lo expuesto, requiero que se eliminen los puntos del capítulo referido a la organización administrativa que he observado.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA
DIPUTADA TULLIO

Opinión de la señora diputada acerca del dictamen sobre presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2001

Estamos esta noche debatiendo el presupuesto nacional para el 2001, en medio de las serias dificultades que se han profundizado en el área social, con una desocupación que crea las más hondas preocu-

paciones en todos los sectores sociales, ya que la falta de empleo —como es obvio— no solo genera la desesperación de quienes no pueden mantener a su familia, sino que amplía la recesión en la que se viene desarrollando una economía paralizada.

Es en este marco no deseado en que debemos pensar un presupuesto para el funcionamiento del gobierno el año entrante, buscando el modo de resolver las dificultosas problemáticas que nos aquejan, sobre todo la fundamental, la piedra angular sobre la que debemos plantear nuestros objetivos, que es la de impulsar el crecimiento, sin el cual no habrá reducción del desempleo, no se reactivará el aparato productivo y la Nación se verá envuelta en un círculo vicioso en el cual se ampliará el déficit para generar mayor ayuda social, hasta que en un momento puede cortarse la cadena y poner al país en la peor de las situaciones.

No creo necesario describir las penurias por las que pasan muchos de nuestros conciudadanos porque creo que todos conocemos la realidad y recorreremos nuestras regiones, de modo que sabemos las angustias que están padeciendo en una Argentina que parece no encontrar un rumbo de desarrollo y producción que permita hacer honor a la frase de que somos un país potencialmente rico, un país sin necesidades alimentarias perentorias, sin carencias en salud, sin problemas en la educación, cuestiones básicas que toda sociedad debe ofrecer a quienes menos tienen, porque son lo mínimo que necesita el ser humano para su supervivencia.

En medio de esta realidad acuciante, hablar de la cultura, de los fondos que hacen falta para la cultura, puede parecer hasta una fantasía, una suerte de sofisticación no acorde a los tiempos. Sin embargo es una falsa dicotomía la que enfrenta a la pobreza con la cultura, porque precisamente uno de los pilares del desarrollo de los pueblos es la cultura, uno de los peldaños que necesariamente se debe escalar para salir del estado de pobreza, aunque —eso es claro— no el único. Son las naciones con mejor educación y cultura las que históricamente han tenido la posibilidad de un crecimiento sostenido y sustentable. Por eso hablamos de la cultura, por eso bregamos para que el arte y las industrias culturales tengan el espacio que merecen en el presupuesto nacional.

Incluso hasta las mentes más economicistas deberán reconocer que la cultura puede generar divisas y empleo, al tiempo que permite una apertura intelectual fundamental en los tiempos que se viven, toda vez que es una herramienta formidable para el crecimiento.

En este marco, preocupa que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, creado por la ley 24.377 por esta Cámara, tenga un presupuesto en un 50 por ciento por debajo de la recaudación que le es propia en virtud de esa norma, ya que, por lo deducido del porcentaje obtenido por la venta de entradas en salas cinematográficas, le corresponderían unos 60 millones de pesos, y sólo se le otorgarán treinta. Esta práctica de no cumplir con las

normas bajo las cuales fueron creados los entes genera no poca inseguridad, porque aquello que sanciona el Congreso es después birlado por los presupuestos que este mismo Congreso aprueba.

Aun en esta situación el instituto plantea otorgar el año que viene dieciséis prestamos para la producción de películas, la concurrencia a noventa festivales de cine y el egreso de dieciséis profesionales de la cinematografía. Lo que se solicita es la inclusión en el presupuesto no de un subsidio de mayor o menor monto para el Instituto de Cine, sino de los fondos que por la recaudación del área le son propios, de manera que aquí se debe reparar esta quita injusta que se le viene haciendo y cumplir con la ley que dio creación a esta entidad, cuya labor como industria cultural genera empleo, es creadora de obras de arte que no sólo se comercializan en el país, sino también tienen salida en el exterior y cuyo fomento puede ser importante para el crecimiento del país, en su doble dimensión: artística y económica.

Otro de los entes que fueron creación de esta Cámara de Diputados y que tiene un sentido federal muy importante para el interior del país es el Instituto Nacional del Teatro, creado por ley 24.800 en 1998. Los fondos con los que cuenta el instituto surgen de dos fuentes de financiamiento: el 8 por ciento de los ingresos efectivamente percibidos por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y el uno por ciento de lo recaudado por juegos de azar (loterías y casinos). Desde su creación el instituto tuvo diversos problemas para poder cobrar los aportes del COMFER, lo que fue generando una deuda que ha perjudicado el accionar y los objetivos planteados por el ente, no obstante haber sido un bastión de federalismo cultural subsidiando salas y grupos de teatro independiente de todo el país, construido espacios teatrales y equipado otros con luz y sonido, subsidiado la producción de obras teatrales, brindado asistencia técnica y capacitación para actores y organizado —entre otros— el evento “300 Ciudades”, una experiencia muy importante para el interior del país, ya que cada grupo teatral contaba la historia de su ciudad.

Lo cierto es que para el año 2000 el presupuesto aprobado fue de 8.418.000, de los cuales sólo fueron asignados para gastos propios del organismo 7.147.000, una asignación presupuestaria que en relación con la de los años 1998 y 1999 fue inferior en casi quinientos y cuatrocientos mil pesos respectivamente. A su vez, la recaudación para el presente ejercicio alcanzaría a 11.251.500 pesos, mientras que la deuda del COMFER asciende a 11.508.645 pesos. Por otra parte, mientras la propuesta presupuestaria enviada a este Congreso para el año entrante es de 11.168.000 pesos, las necesidades del Instituto —y lo que corresponde de acuerdo a lo recaudado— ascienden a 14 millones. Esta es otra de las cuestiones que debemos corregir para que se cumplan las normas que establecen lo que deben percibir los entes culturales.

Son muchos los aspectos que se pueden analizar en lo que hace al área de cultura pero que en

honor a la gran cantidad de temas y oradores no voy a detallar. Simplemente he mencionado estos casos puntuales, porque es muy necesario tenerlos en cuenta al tiempo que reclamo firmemente que todos los organismos que se ocupan de la cultura en el ámbito del gobierno nacional comprendan el sentido federal de la tarea que deben desarrollar. Siempre digo que la cultura no termina en la General Paz y lo repito para que quede grabado en aquellos que tienen responsabilidades en el área de la Secretaría de Cultura, en los entes que de ella dependen y en los que son autónomos, ya que es preciso terminar con esa concepción limitada a megaeventos que concitan la atención en vivo de una porción restringida del país y que tienen difusión sólo a través de los medios de comunicación. El interior es parte de este país y tiene derecho a un intercambio cultural con los centros urbanos más grandes y al fomento de sus propios artistas. Quiénes creemos que la cultura es patrimonio de todos, a lo largo y a lo ancho del país, vamos a defender ese derecho.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ROMERO

Opinión del señor diputado acerca del dictamen sobre presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2001

Nos corresponde referirnos en el análisis de este presupuesto al área en la que diariamente desempeñamos nuestra función: la actividad primaria, específicamente la actividad agropecuaria.

Debemos resaltar la situación de las economías regionales por largo tiempo abandonadas; la falta de una discusión racional de la economía y de una economía que de afuera hacia adentro restablezca el equilibrio de las asimetrías naturales, siempre y cuando los hombres no agreguemos diferencias por vía de las normas.

Por eso no debemos abandonar el esfuerzo comprometido en los programas sociales ni el apoyo presupuestario para organismos como el INTA y el SENASA que requieren permanentemente de refuerzos para cumplir acabadamente con su finalidad.

No se han apagado aún los ecos de la grave crisis económica que provocó la aftosa, cuando se suma al mercado mundial el mal de la vaca loca, lo cual hace necesario extremar medidas y prever fondos para transformar la frontera física en una verdadera “frontera sanitaria”, en resguardo de la dignidad del hombre, así, a secas, del ser humano, sea paraguayo, brasileño, uruguayo o argentino; el hombre, el ser humano, que conforma un mercado interno que no pertenece a ningún país individualmente considerado, sino que es nada más y nada menos que el Mercosur.

Son pues, necesarias políticas institucionales activas, las que deben contar con partidas presupuestarias que deben estar asentadas en el haber.

Por eso no está mal el aumento de 15 millones previsto en el presupuesto para los programas con fuerte acento social como el Proinder, PSA, Prohuerta y Cambio Rural.

Se trata de un presupuesto posible que mejora aquellos con intenciones plurianuales que a los cuatro meses de vigencia ya proponían cambios.

La ahora oposición menemista que prohibió toda la parafernalia de normas distorsivas de la economía, hoy se asombra y hasta se golpea el pecho y se rasga las vestiduras por el déficit fiscal.

La ingobernabilidad a que hace referencia es hua del vaciamiento de la Argentina provocado por ella misma.

Dejaron 153 mil millones de deuda externa; 75 mil millones de deuda del sector privado no financiero; 20 mil millones de las provincias; 7 mil de los municipios; 11 mil del campo; 10 mil millones de déficit fiscal; 3,5 millones de desocupados y subocupados y 13,5 millones de pobres.

Asombra, señor presidente, la mala memoria de los justicialistas-menemistas neoliberales.

Por eso, reiteramos que el acordado no es el mayor presupuesto; es el presupuesto posible, el presupuesto real.

Eso sí, hay que hacer un esfuerzo para que la filosofía política de la Alianza supere la filosofía economicista a ultranza de la ortodoxia, la cual ocurre en marchas y contramarchas que irritan a propios y extraños.

Señor presidente: algunas de las cuestiones pendientes se arreglan por vía presupuestaria, pero muchas otras requieren de leyes estratégicas, tales como la reforma a la ley de emergencia 22.913, la cual necesita de fondos propios para poder atender las contingencias climáticas desde un punto de vista técnico y no por vía de ATN otorgados con criterio absolutamente político. Dichos fondos deberán además servir de base para un seguro agrícola integral, cuya póliza permita obtener créditos independientemente de toda precalificación, y que además asegure rindes y precios. Esta es la discusión que nos debemos: la conformación de una estrategia nacional y no meras palabras. No precisamos del consejo de quienes a su tiempo no supieron gobernar y fueron manejados por la corrupción de la que hicieron su modo de vida. Que nos dejen gobernar.

4

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA
DIPUTADA MILESI

**Opinión de la señora diputada acerca del artículo
46 del dictamen sobre presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio 2001**

Solicito que se introduzca una partida de 250 mil pesos para la Escuela de Medicina de la Universidad del Comahue, la cual sufre actualmente una situación de desigualdad con el resto de las facultades

de medicina del país, a las que por cada año de estudios se incrementa su presupuesto en una suma como la aludida.

Quiero además expresar que es la única escuela de medicina de la Patagonia que tiene un cupo de ciento veinte alumnos por año —cifra acordada con las provincias de Río Negro y Neuquén— y que es la primera en el país en la cual los alumnos, al día siguiente de ingresar, ya tienen contacto con la comunidad. Esta escuela tiene una visión diferente respecto de la medicina que, es la que se necesita para transformar el actual modelo de salud y modificar la pirámide invertida según la cual gastamos en las dos últimas horas de vida del paciente el 80 por ciento del total del gasto que tendríamos que haber efectuado para preservar su salud.

Por eso esta escuela otorga a sus egresados el título de médicos generalistas, ya que se tiende a la prevención.

Para finalizar, quiero decir que este tipo de formación personalizada sufre una deserción de apenas el 3 por ciento.

5

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA
DIPUTADA FOCO

**Opinión de la señora diputada acerca del artículo
46 del dictamen sobre presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio 2001**

Según la información que surge de la planilla 22, anexa al artículo 46, en la columna de salud, se observa que una vez más la carrera de medicina de la UNC se ve postergada en cuanto a la asignación de una previsión presupuestaria que mínimamente le permita atender su funcionamiento.

Esta carrera fue creada en el año 1996 y, sin entrar en consideraciones sobre las circunstancias de su creación, lo cierto es que el Ministerio de Educación de la Nación se comprometió a financiarla hasta el año 2003, promesa que se mantiene incumplida, ya que cuenta con el mismo presupuesto desde su inicio —\$ 250.000—, para hacerse cargo de una matrícula que, como es lógico aumenta cada año, por lo que la universidad se ve obligada a cumplir con las obligaciones emergentes del desenvolvimiento de esta carrera detrayendo fondos de sus recursos generales y sometiendo de esta manera a severas restricciones al resto de las unidades académicas, lo que obliga a la supresión de planes de inversión edilicia y equipamiento. En suma, el funcionamiento de la carrera, hasta ahora, ha sido inversamente proporcional a su crecimiento. La creación de esta carrera, además de demostrar el crecimiento institucional y académico de la UNC, da cuenta del cumplimiento de una importante función social —anexa a la que de por sí cumple la educación— al albergar en sus aulas a jóvenes de ciudades muy alejadas cuyas familias no les pueden costear una residencia decorosa.

Como es natural, más estudiantes necesitan más docentes, más aulas, más bibliografía, más laboratorios, más becas, más servicios y una mejor distribución de las asignaciones presupuestarias. Sin embargo, en el 2001 los alumnos van a estar cursando el cuarto año de estudios y dichas asignaciones se mantienen congeladas desde el inicio de su carrera.

Por todo lo expresado, que me exime de mayores comentarios —sirva por caso señalar que la deserción sólo ha alcanzado al 3 por ciento—, solicito se incorpore a la carrera de medicina de la UNC una

partida adicional de \$250.000, que además de resultar un monto mínimo para hacer frente a su funcionamiento, cumplirá con un criterio de estricta justicia y será una verdadera herramienta de equidad, toda vez que la equiparará con otras facultades de medicina de nuestro país que no cuentan con hospitales universitarios y que disponen de una partida de \$500.000.

sin el monto adicional aludido, peligra la continuidad de la carrera de medicina, por lo que solicito a los señoras y señores diputados que adhieran a este requerimiento.